

Comunidad de Madrid

Aguirre apuesta por el traspaso de dinero público a actuaciones privadas superfluas

La presidenta del PP de Madrid y del Gobierno regional sigue atacando a la comunidad educativa, que ha anegado de movilización verde todos los centros escolares y espacios públicos, casi diariamente desde el inicio de este curso, secundando muy mayoritariamente numerosísimas concentraciones, manifestaciones, encierros y ocho jornadas de huelga.

LOS MULTITUDINARIOS gritos por la enseñanza pública y contra los recortes son desoídos, en un constante ejercicio de autismo y cinismo de la consejera de Educación, Lucía Figar, y de los demás miembros de ese Gobierno, con la presidenta Aguirre a la cabeza, que solo responden con menos inversión en la escuela pública y descalificaciones del profesorado y otros miembros de la comunidad educativa.

La respuesta de la prepotente y altiva presidenta del PP y de su consejera siempre ha sido la misma: la incomprensión o ignorancia del trabajo de los profesores y las profesoras, la descalificación y, a veces, el insulto, la calumnia y el acoso a muchos de esos trabajadores y a los sindicatos que los representan. En noviembre han añadido a sus ataques a la enseñanza pública, la injustificada persecución de aquellas personas, funcionarios públicos, que en el ejercicio de su derecho constitucional a la libertad de expresión y/o en el ejercicio responsable y ético de su función, han manifestado públicamente su disconformidad con las injustas e injustificadas imposiciones educativas y laborales del gobierno regional.

Ese clima preconstitucional de abuso de poder que están imponiendo se traduce en un menor y peor servicio público y, para muchos profesores y profesoras, en la pérdida de derechos laborales y económicos.

El ataque planificado a la enseñanza pública por el Gobierno del PP se concreta en los presupuestos de 2012, que profundizan las consecuencias presupuestarias que apuntaban las Instrucciones de comienzo del curso 2011-12: nulo crecimiento del gasto educativo; distribución menos equitativa, reduciendo de los fondos destinados a los profesores y centros públicos e incrementando las unidades concertadas, manteniendo las deducciones en el IRPF por gastos en uniformes, etc.

Las cantidades que se presupuestan para 2012 están por debajo de las de 2007, 2008, 2009 y 2010 y son prácticamente iguales a las de 2011, año respecto del que apenas crece un 0,4% su cuantía. Pero este retroceso o congelación en el gasto no se produce por igual en todas sus partidas. Invierten menos en profesorado y centros públicos y ahondan en el conflicto que viven los institutos, al dar por buenas las controvertidas Instrucciones y mantener para 2012 sus consecuencias más negativas: reducción de cupos, reducción para gastos de mantenimiento. Profundizan en la privatización y en una distribución cada vez menos equitativa de los fondos públicos: aumentan las unidades

concertadas, a la vez que reducen las becas y las medidas de atención a la diversidad. Sobrecargan al profesorado y personal de administración y servicios de los centros: disminuyendo las plantillas a la vez que aumenta el alumnado, lo que empeorará la ratio; no contemplan ningún incremento salarial ni recuperación del poder adquisitivo perdido. Mantienen el incumplimiento de los acuerdos de financiación de las universidades, que ven aumentar sus alumnos y tienen que implantar el Espacio Europeo de la Enseñanza Superior. No atienden a las demandas de más educación, especialmente urgentes, en las enseñanzas postobligatorias (FP), a las que no pueden acceder cada año miles de alumnos, y gestionan los fondos desde el más amplio desacuerdo social y político.